

GACETA DE PUERTO-RICO.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gonzalez. Fortaleza 15.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

AÑO 1870.

JUEVES 3 DE FEBRERO

NUM. 15.

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Direccion de Administracion local.

Por el correo de España llegado á esta Capital el 30 del corriente mes, se recibieron el Decreto de S. A. el Regente del Reino y la Circular del Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, que se insertan á continuacion:

DECRETO.

Resultando una vacante de Diputado á Cortes por la tercera circunscripcion electoral de la Isla de Puerto-Rico,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se convoca á los colegios electorales de la tercera circunscripcion de la Isla de Puerto-Rico, para que procedan á la eleccion parcial del Diputado á Cortes Constituyentes que debe representarla.

Art. 2.º La eleccion dará principio el día 25 de Febrero próximo, y se verificará en la forma dispuesta para las generales con arreglo al decreto de 14 de Diciembre de 1868 y al reglamento para su ejecucion dictado en 27 de Enero último, por el Gobernador Superior Civil de la expresada provincia.

Art. 3.º El Gobernador Superior Civil, adoptará las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente decreto.

Dado en Madrid á once de Enero de mil ochocientos setenta.—Francisco Serrano.—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

ORDEN.

Excmo. Sr.: En cumplimiento de la ley que autoriza la eleccion de Diputados á Cortes donde resulten vacantes, S. A. el Regente del Reino se ha servido convocar los colegios electorales de la tercera circunscripcion de esa provincia en que debe elegirse un Diputado. Por segunda vez, desde el mal aventurado suceso de 1836, la Isla de Puerto-Rico ejercerá el derecho político por excelencia, el que determina y define el concurso activo de los ciudadanos en la obra suprema de constitucion y organizacion del Estado, de intervencion y censura de los actos del Poder Ejecutivo. Pues por ser estas las consecuencias legítimas del derecho de sufragio, su ejercicio dentro de los límites legales, debe ser libérrimo y eficazmente garantido. La ley, ponga ó no restricciones á aquel, desde el momento en que lo admite y declara, cualquiera que sea su extension, supone necesariamente en el elector el perfecto conocimiento de lo que debe hacer, y por lo mismo veda todo acto directo ó indirecto que pueda encaminar su voluntad á una determinacion que ni piensa ni quiere. Semejante coaccion moral, ó de cualquier género que fuere, siempre censurable en los particulares; como tal coaccion, cuando se trata del Poder y de sus delegados, es ciertamente punible é ignominiosa. Llámese influencia moral, llámese de otro modo, toda intervencion de la Autoridad y sus agentes que no tenga por objeto garantizar la libertad del sufragio y facilitar su ejercicio á quienes la ley reconoce el derecho de votar, es un atentado imperdonable, y en valde el quererlo coonestar con salvedades falaces, ora invocando el orden público, ora el cumplimiento de la ley. Desgraciadamente la experiencia acredita que casi todas las cuestiones llamadas del orden público, en los momentos electorales reconocen por causa, no las

coacciones particulares, que para reprimirlas basta y sobra la Autoridad judicial, porque si se producen son delitos comunes, sino las coacciones del poder ó sus agentes, que con el objeto de patrocinar esta ó la otra persona afectan á aquel. El Gobierno de S. A. no admite, no puede admitir, porque es honrado, tan peligrosa doctrina y tan condenables medios. Si su conducta es patriótica y buena, sabe bien que, aparte excepciones inevitables y extremas, la opinion sana y liberal con él está; y los delegados que envíe á las Cortes serán apoyos, tanto mas firmes, cuanto mas desinteresados y espontáneos. Si por el contrario, la marcha que sigue no es conducente al bien público, ni se funda en la justicia, ni se inspira en la libertad, justo y necesario es tambien que la opinion le advierta, aconseje y censure para que enderece sus pasos hácia el buen camino. Por lo mismo desea y quiere firmemente la mas completa libertad en esa manifestacion y en el acto mas propio para serla, que es el de la emision del voto.

Esta es, pues, la primera é invariable regla á que V. E. deberá ajustar su conducta en la próxima eleccion que debe verificarse en esa provincia. Libre la manifestacion de todos; libres los actos de todos dentro de la ley.

Siempre el derecho de sufragio, aun admitido con la extension que la Constitucion del Estado lo declaró para la Peninsula, tiene ciertas restricciones originadas en la incapacidad natural ó legal de los electores. Cuando el sufragio es restringido aquellas incapacidades aumentan, necesariamente; pero ni en uno ni en otro caso quiere decir que á las restricciones de la ley, y fundándose en interpretaciones farisáicas ó arbitrarias, deben agregarse otras á gusto y capricho de la Autoridad. Todo al contrario: por lo mismo que el derecho de sufragio, como derecho de todos, tiende á universalizarse allí donde es limitado, cuando ocurren dudas sobre su existencia, sobre la aptitud de tal ó cual individuo, la interpretacion no debe ser restringida, sino amplia; que vale más la admission de algunas dudas que la privacion de uno que no lo sea; lo primero podrá considerarse una antipacion del derecho; lo segundo es siempre violacion del mismo. En conformidad con estas indicaciones, cuidará V. E. de prevenir eficazmente á todas las Autoridades y á cuantos deban intervenir en este asunto que ajusten su conducta á los principios enunciados, y eviten con cuidadoso esmero esas interpretaciones forzadas y arbitrarias, que se encaminan siempre á la privacion del derecho de sufragio y á escatimar el ejercicio de tan preciosa facultad.

Todavía la Autoridad pudiera hacer uso de ciertos medios, aunque indirectos, de igual ó idéntica gravedad que los anteriormente denunciados y de efectos tal vez mas seguros. Los apremios, las comisiones, las penas administrativas y discrecionales, el acceso á los departamentos de Gobierno para obtener el logro repentino de pretensiones injustas, las promesas de proteccion, y otros mil resortes que se ocultan bajo el inofensivo mote de la accion administrativa, y son, sin embargo, sombríos recuerdos de la burocracia espirante. Sobre este punto capital debe fijar V. E. muy preferentemente su atencion, y allí donde note el mas pequeño abuso, corregirlo instantánea y duramente sin contemplacion alguna. No es posible que aun la tentativa de ese abuso se deje prosperar; sería el germen de futura corrupcion é injusticia, y es preciso ahogarlo en los primeros anuncios. Que si el cuerpo electoral se acostumbra á ver en la administracion, no la directora de su opinion, sino la garantía eficaz de la libertad para emitirla, estos primeros momentos de vida pública serán invocados siempre con religioso respeto, y servirán de ejemplo y estímulo para aquellos á quienes consideraciones del momento han privado del derecho de sufragio. Los pueblos se educan en el respeto y cumplimiento de la ley por gobernantes y gobernados; pero allí donde los primeros rompen los diques de la legalidad, los segundos se aprestan á la habitual y desorganizadora inobediencia.

Tampoco puede olvidarse que la facilidad para emitir el sufragio mediante la multiplicacion de puntos en que el acto de la eleccion se verifique, es otra condicion, exterior sí, pero de notoria im-

portancia. En este punto el Decreto de 14 de Diciembre de 1868, que ya es ley, ha de ser religiosamente cumplido, y V. E. de seguro pondrá los medios necesarios para que sus disposiciones tengan efecto sin menoscabo alguno.

Por último, la garantía eficaz de toda ley política, y sobre todo de los derechos que consagra y su ejercicio, es la publicidad. La ley de la peninsula estima grandemente esta condicion; y pues que el artículo 25 de la que rige en Puerto-Rico permite la mayor latitud sobre este extremo, V. E. debe fijar su atencion en aquel y procurar que sea un hecho en todos los colegios sin limitacion de ningun género.

Lo que de orden de S. A. comunico á V. E. para su puntual cumplimiento; encargándole asimismo que disponga la publicacion de esta orden en la Gaceta de la Isla y en los periódicos de la circunscripcion, si los hubiere.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Enero de 1860.—BECERRA.

Sr. Gobernador Superior Civil de la Isla de Puerto-Rico.

Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, en el mismo día 30 del corriente mes, se publican ambos documentos, para conocimiento general y su mas exacto cumplimiento por quienes corresponde. Puerto Rico 2 de Febrero de 1870.—Cárlos de Rojas.

Por disposicion del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, y para conocimiento general de los habitantes de esta Isla y con especialidad de los de la 3.ª circunscripcion electoral, se publican á continuacion el Capítulo 5.º de la Ley de 9 de Noviembre de 1868, que comprende la sancion penal por delitos electorales, y el decreto de este Gobierno de provincia de 28 de Enero de 1869, sobre el ejercicio del derecho electoral.

Puerto-Rico 2 de Febrero de 1870.—Cárlos de Rojas.

CAPITULO 5º

DE LA SANCION PENAL.

Ley de 9 de Noviembre de 1868.

121. Toda falsedad cometida en el padron, en las cédulas de vecindad, ó en otro documento público, por cualquier funcionario con el fin de dar ó quitar el derecho electoral indebidamente, será castigado con arreglo á las disposiciones de la seccion primera del capítulo 4.º, título 4.º del Código penal.

122. En el mismo caso estarán los que aplicaren indebidamente votos á favor de un candidato ó candidatos para secretarios escrutadores, para concejales ó para diputados provinciales ó á Cortes.

123. Serán castigados con la pena de inhabilitacion perpétua especial para el cargo respectivo, inhabilitacion absoluta perpétua para ejercer derechos políticos y multa de 20 á 200 duros, los funcionarios públicos de cualquiera clase ó categoría que obligasen á un elector á dar su voto ó impidieren que lo diere de los modos siguientes:

1.º Haciendo salir de su domicilio ó permanecer fuera de él á un elector en los días de elecciones, ó impidiéndole con cualquier otra vejacion al ejercicio de su derecho electoral.

2.º Conduciendo por medio de agentes públicos de la autoridad civil, militar ó eclesiástica á los electores para que emitan sus votos.

3.º Imponiendo con promesas ó amenazas á sugetos determinados, designándolos como los únicos que deben ser elegidos.

124. Incurrirán en la pena de suspension, multa de 10 á 100 duros é inhabilitacion

perpétua especial para ejercer derechos políticos.

1.º El presidente de la mesa que maliciosamente deje de nombrar secretarios para la mesa interina á los individuos de mayor ó menor edad con arreglo á lo prevenido en el artículo 31 de este decreto.

2.º El presidente de la mesa que claramente negare ó indirectamente impidiere á los electores usar el derecho que les concede el párrafo 2.º del artículo 39 de este decreto.

3.º El que á sabiendas y con manifiesta mala fé alterase la hora en que deben comenzar ó concluir las elecciones.

4.º La autoridad que obligue á sus dependientes á que hagan á sus electores recomendacion en favor de determinados candidatos.

5.º El que obligue á comparecer ante sí á electores ó funcionarios dependientes de su autoridad con el mismo objeto.

6.º Los que maliciosamente dejen de proclamar al diputado elegido segun la ley, ó indebidamente proclamen á otro.

125. Serán castigados con la pena de inhabilitacion perpétua para ejercer derechos políticos y multa de 10 á 100 duros.

1.º El secretario escrutador que despues de haber tomado posesion de su cargo le abandone ó se niegue á firmar las actas ó acuerdo de la mayoría.

2.º El presidente y secretarios escrutadores que falten á las prescripciones de los artículos 40 y 60 de la ley electoral, negándose á consignar en el acta las dudas y reclamaciones que se presenten y cualquiera protesta motivada.

3.º El presidente de mesa, alcalde ó secretario que no remitan al gobernador de la provincia ó al alcalde del pueblo de circunscripcion, las copias del acta á que están obligados por el artículo 85 de este decreto.

4.º Los que estando incluidos en el padron y provistos de cédulas, voten sabiendo que están inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos ó comprendidos en el artículo 2.º del presente decreto.

5.º El que vote dos veces, en la misma ó en distinta mesa, en una eleccion ó tome el nombre de otro para votar usando cédula ajena, ó teniendo el mismo nombre, sabiendo que no es la persona comprendida en las listas.

6.º El vecino que al formarse el padron de vecindad se suponga con mas edad de la que realmente tenga para adquirir el derecho electoral; y el encargado de formar el padron que desfigure el nombre de algun vecino con el fin de privarle de dicho derecho.

7.º El elector que con el propósito de ser nombrado secretario escrutador interino, faltare á la verdad, suponiendo distinta edad de la que tiene.

8.º Los que quebrantaren los sellos ó rompieren los sobres de los pliegos cerrados á que se refieren los artículos 85 y 105 antes del acto de escrutinio general.

9.º Los Gefes militares y marinos que provean de cédula declarativa del derecho electoral á alguno de sus subordinados que no tenga este derecho.

126. Incurrirán en la pena marcada en el artículo 42 del código y en la inhabilitacion perpétua para derechos políticos:

1.º Los que con dicitos, amenazas ó cualquier otro género de demostraciones violentas intenten coartar la libertad de los electores.

2.º Los que valiéndose de personas re-